



Un agricultor de Elche prepara sus canales para recibir agua del Tajo. | ANTONIO AMORÓS

La difícil ruta judicial para salvar el Tajo-Segura deja la pelota en manos de Puig

Los propios regantes asumen que los recursos ante el Tribunal Supremo tienen poco recorrido porque el Gobierno no vulnera la ley, por lo que vuelve a ser, todavía más, la hora de la política

0

F. J. Benito

07·08·21 | 19:28

A medida que se consolida el frente formado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el gobierno de Castilla-La Mancha contra el **trasvase Tajo-Segura**, cada día se hace más difícil para el presidente de la Generalitat, **Ximo Puig**, mantener el discurso de que el trasvase es irrenunciable -si las veces que ha pronunciado la palabreja se tradujeran en metros cúbicos de agua salvados, el problema hídrico en la provincia sería historia-. Poco a poco su figura va desgastándose y ni él ni su equipo parecen o quieren valorarlo. Tras la aprobación del Consejo de Ministros del primer recorte al Tajo-Segura modificando las normas de explotación, simplemente por un capricho político de la vicepresidenta Teresa Ribera (los propios técnicos que realizaron el informe llegaron a plantearle que no era

necesaria tanta prisa) se ha iniciado la batalla judicial, pero tanto el Consell, como la Diputación, como **los propios regantes** saben que ese camino no tendrá mucho recorrido.

Guste más o menos, el Ministerio para la Transición Ecológica ha obrado, solo faltaba lo contrario, con la ley de su parte, y lo mismo que las competencias del agua en España son estatales, la legislación, la misma que redactó el Ejecutivo del PP en 2014, le concede el derecho a modificar las normas. Otro tema es si los fundamentos son cuestionables o no, pero ningún juez se va a poner a dilucidar si Ribera se ha precipitado, ni va a valorar, por ejemplo, si los expertos en clima tienen una varita mágica que les garantice si en cinco o diez años va a llover más o menos, por mucho que todas las señales apunten a un aumento de los periodos secos.



Primer «tajo» al Tajo-Segura y la Generalitat en su discurso

F. J. Benito

Ojalá el Tribunal Supremo -el propio presidente de la Diputación, Carlos Mazón, impulsor del recurso de la provincia, admite que nadie puede saber cómo acabará un pleito cuando este se inicia- devuelva el Tajo-Segura al lugar donde debiera estar, pero a falta de conocer la sentencia, que al ritmo que va la justicia puede conocerse cuando ya no quede ni un tomate en la Vega Baja, lo que cada día parece más claro es que la solución es política y, hoy por hoy, la pelota está en el tejado de Ximo Puig. Carlos Mazón sostiene cada vez que tiene ocasión su particular proclama: «la solución es derribar al gobierno de Pedro Sánchez». Quién sabe. Los precedentes del Ejecutivo del PP con el agua no son, tampoco, para enmarcar, por lo que, ahora mismo, la baza que le queda a la provincia para salvar el trasvase sigue depositada en el presidente Ximo Puig, y en el poder de convicción que demuestre en Madrid sobre el tema del agua. Hasta ahora no se ha visto ningún paso, pero, insisto, solo él podría convencer a Teresa Ribera y a Pedro Sánchez (nunca le he escuchado, por cierto, referirse al tema) para que amortiguasen el palo programado al Tajo-Segura. La famosa hoja de ruta que marcó Cristina Narbona, y que no es otra que cambiar el agua del Tajo por la desalada. Punto.

Lo que está claro es que el futuro de la provincia es insostenible si no se garantizan los recursos hídricos y el debate no puede ser ya, tampoco, si desalación o trasvases. Agua

desalada, por otro lado, que, aunque se produce en Torre Vieja, se va toda al Campo de Cartagena. Allí hay dinero para pagarla y sigue sin poder utilizarse en la provincia porque, pásmense, no hay conexiones con las explotaciones agrícolas de más de 20.000 agricultores del sur. Mientras, el Gobierno (Acuamed) continúa con sus planes para ampliar la capacidad de producción en Torre Vieja hasta los 180 hm³, pero sin resolver lo básico, su distribución en Alicante, por lo que si nadie lo impide, el caudal nacerá en Alicante, pero será para la huerta murciana.



La Comisión de Explotación del Tajo-Segura certifica el cambio de las normas y deja el trasvase de agosto en "hasta" 20 hm³

F. J. Benito

El cerco al trasvase del Tajo se ha ido estrechando tanto en Madrid como en Toledo mientras continúa el bloqueo del Júcar-Vinalopó -el envío de socorro de este mes es eso, un riego de socorro- tras haberse invertido más de 400 millones de euros de dinero público, pero la provincia tampoco ha hecho nada por trabajar en soluciones en el propio territorio. Por ejemplo, un mejor aprovechamiento de las aguas residuales que se van al mar a través de una depuración mínima, y que podrían utilizarse sin problemas en la agricultura, aunque no para el consumo humano, siempre que el caudal fuera de calidad. Eso también es ecologismo. Un asunto cuyas competencias también son de un Consell que nunca ha hecho los deberes en este tema. Empezando por el PP, que fue el primer culpable, y que ahora exige soluciones al equipo de Puig. Lo que sí parece ya claro es que reclamar trasvases del Ebro y del Tajo Medio, aunque técnicamente sean posibles, parece ya un brindis al sol viendo por dónde va la política estatal y europea. No se hicieron en su momento y no se harán jamás.

Las cuentas no salen. Por cada metro cúbico por segundo que se eleve el caudal ecológico se reducirán 30 hm³ al año del trasvase para Alicante y Murcia. Como el objetivo de la Confederación del Tajo parece que es duplicarlo, es decir, de los seis actuales pasar a 12 m³ por segundo, la merma se queda en 180 hm³ al año sobre unas existencias, que rara vez superan los 600 hm³ y con la espada de Damocles de la línea de los 400 hm³ de reserva a partir de la cual se cierra el trasvase. Hace casi siete años, cuando Mariano Rajoy y sus colaboradores vendieron que el «memorándum» del Tajo acabaría con todos los problemas, plantearon la disyuntiva entre caudales ecológicos o subir la reserva. Se optó por lo segundo.

El Supremo, el mismo tribunal en el que se confía ahora para parar el recorte del Tajo-Segura, falló después algo así como el «2x1», lo que deja el trasvase contra las cuerdas, y hace que Alicante sume una nueva derrota en su lucha por asegurarse un suministro de agua de calidad y a buen precio.

Desgraciadamente, la demagogia se ha impuesto en Madrid y en el resto de España, alimentada por los casos de corrupción, que trasladaron la sensación de que en la Comunidad Valenciana el agua solo se quiere para alimentar el ladrillo y los pelotazos. Nadie valora que somos buena parte de la huerta de Europa, y de que de los beneficios de nuestra agricultura también viven el resto de los españoles, los mismos que se duchan cuando veranean en la Costa Blanca. Qué mala prensa hemos tenido. Pero, no por eso, la provincia está exenta de hacer sus deberes.

¿Desalación? Sí, pero en Alicante, en un caso análogo al de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía, que la quieren para su negocio turístico, y donde carecen de conexión con el río por la dejadez de los gobiernos regionales que pasan por Toledo, tampoco hay conexión con la desaladora de Torre Vieja. La planta, con un coste de 350 millones de euros pagados con el dinero de todos los españoles, los que tienen agua y también los que hacen equilibrios para aprovechar hasta la última gota del escaso recurso, no tiene la tubería para abastecer de agua de riego al 80% de los agricultores del sur de Alicante, entre ellos los 20.000 comuneros de Riegos de Levante. El Gobierno ha anunciado una inversión de 500 millones de euros. Tanto nos han engañado que es difícil de creer.